



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

DEMANDANTE:	Jorge Enrique Toro Restrepo
DEMANDADA:	Colpensiones, Porvenir S.A. y Ministerio de Hacienda y Crédito Público –OBP-
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
TEMA	Ineficacia
DECISIÓN:	Confirma y Adiciona
Radicado	05001-31-05-018-2018-00584-01 (358) 05001310501820180058402

La **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A., así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, en el proceso ordinario laboral adelantado por el señor **Jorge Enrique Toro Restrepo** en contra de **Colpensiones, Porvenir S.A., y Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficina de Bonos Pensionales**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES:

1.1. PRETENSIONES.

El señor Jorge Enrique Toro Restrepo presentó demanda en contra de Porvenir S.A., Colpensiones y Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos

Pensionales –OBP- buscando se declare nula o ineficaz su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), disponiendo el regreso automático al Régimen de Prima Media (en adelante RPM); que se ordene a Porvenir S.A. a devolver a Colpensiones todos los valores que recibió con motivo de la afiliación del demandante, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, seguros previsionales costos de administración y rendimientos. Que se condene a Colpensiones a recibir todos los aportes de los fondos privados, actualizar la historia laboral con los aportes realizados a Porvenir S.A.; y se condene al Ministerio de Hacienda y Crédito Público OBP, anular el bono pensional tipo A liquidado, expedido y/o emitido; y las costas del proceso.

1.2. HECHOS

Manifestó que tiene 64 años, laboró para el municipio de Medellín de diciembre 27 de 1982 a julio 14 de 1986, y luego en la Rama Judicial donde estuvo afiliado a CAJANAL desde febrero 25 de 1988 , luego se trasladó al RAIS, vinculándose a Porvenir S.A. el 23 de enero de 1997, pero el asesor de la entidad no le dio información sobre las condiciones del traslado aun cuando era funcionario público de carrera administrativa; relató que dentro del mismo régimen se trasladó a Horizonte en abril 12 de 2000, retornó a Porvenir SA en junio 17 de 2005, y finalmente en noviembre 13 de 2007 se pasó a Horizonte, la cual fue absorbida por Porvenir SA.

1.3. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandas se pronunciaron de forma oportuna, así:

Porvenir S.A. aceptó los hechos relativos a la edad del accionante, y su afiliación a ese fondo, el traslado de AFP a Horizonte y movimientos entre éste y Porvenir SA, y la fusión entre Horizonte con Porvenir SA, la realización del cálculo provisional que le efectuaron, la negación de la proyección de la mesada pensional solicitada por el actor, la petición de proyección de la pensión de vejez elevada ante dicho fondo y los documentos solicitados en la misma; de los demás indicó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a la prosperidad de lo pedido y propuso las excepciones de prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las

obligaciones demandadas, buena fe, prescripción de las obligaciones de tracto sucesivo, y enriquecimiento sin causa.

Colpensiones por su parte, aceptó la edad del accionante, las fechas en que laboró para el municipio de Medellín y su vinculación como empleado de la Rama Judicial y afiliación a Cajanal antes de la entrada en vigencia del SGSS pensiones, el cumplimiento del mínimo de semanas para obtener la pensión, la negación de traslado al RPM a las solicitudes elevadas ante Horizonte y Porvenir, y negativa de retorno a Colpensiones, la solicitud de proyección de pensión y documentos que formuló ante Porvenir; frente a los otros, señaló que no le constan o no son hechos, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del derecho de afiliación al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, falta de causa para demandar, falta de interés en su vida pensional, buena fe, convalidación de la afiliación, mala fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público –O.B.P.- en su escrito aceptó los hechos relacionados a la edad del accionante, las fechas en que laboró para el municipio de Medellín y su vinculación como empleado de la Rama Judicial y afiliación a Cajanal antes de la entrada en vigencia del SGSS pensiones, el traslado de Porvenir a Horizonte y la fusión con Porvenir SA, la petición elevada ante dicho ente de anulación del bono pensional tipo A; frente a los demás hechos manifestó que no le constan o no son hechos, se opuso a las pretensiones y como excepciones formuló las de inexistencia de obligación y ausencia de responsabilidad de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público y buena fe.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 25 de octubre de 2022, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación del señor JORGE ENRIQUE TORO RESTREPO al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A, conforme a los argumentos esbozados en la parte motiva de la presente providencia, y por ende la movilidad entre administradoras, concretamente con HORIZONTE quien es Hoy PORVENIR.

SEGUNDO: ORDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PORVENIR S.A., efectuar el traslado inmediato de todos los valores que hubiere recibido con motivo de su afiliación, como cotizaciones, con los rendimientos que se

hubieren causado, las cuotas de administración debidamente indexadas, primas de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobreviviente, porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima con cargo a sus propios recursos y por el tiempo que el demandante realizó aportes en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, según se explicó en las consideraciones de la presente providencia.

SEGUNDO: Se CONDENA a la codemandada PORVENIR como actual administradora de los recursos pensionales de la parte actora a trasladar a la ejecutoria de este fallo, al RSPMPD todos los valores de la cuenta de ahorro individual de la parte actora que incluyan además de los aportes concretamente destinados a la CAI, los rendimientos. Y también se CONDENA a PORVENIR a devolver, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de este fallo, de su propio peculio y debidamente indexados, los valores de los aportes pensionales que recibieron de la parte accionante o en su favor destinados a cuotas o gastos de administración del artículo 20 de la Ley 100 de 1993; y se CONDENA a COLPENSIONES a recibir y/o a cobrar esos dineros.

TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a activar la afiliación del señor JORGE ENRIQUE TORO RESTREPO, recibir las sumas indicadas y continuar como su administradora de pensiones, según se dijo en la parte motiva.

CUARTO: ABSOLVER al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES de la pretensión formulada en su contra por el señor JORGE ENRIQUE TORO RESTREPO, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de prescripción, las demás quedan implícitamente resueltas como meras oposiciones.

SEXTO: CONDENAR en COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la parte demandante, para cuya liquidación se incluirán como Agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, al momento de la liquidación. Sin costas para COLPENSIONES ni para el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, conforme lo explicado en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: Sea o no apelada la presente decisión se dispondrá remitir el expediente ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Medellín para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

1.5. RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de **Porvenir S.A.** interpuso recurso, contra el numeral segundo de la decisión, con respecto a la condena a trasladar las cuotas de administración en forma indexada, ya que no forman parte de la pensión de vejez y por ello están sujetos a prescripción; y que solo se debe retornar los aportes y rendimientos sin que proceda la prima de seguros previsionales, ni la comisión por administración o rendimientos financieros.

1.6. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Porvenir, indicó que no se probaron los elementos de la nulidad absoluta, ni los vicios de consentimiento afirmados por lo que el traslado goza de plena validez, que siempre garantizó al actor la posibilidad de regresar al régimen y le brindó la información necesaria sobre el funcionamiento, características y requisitos del RAIS, el cual escogió de manera libre y voluntaria y donde permaneció por más de

20 años sin hacer ninguna manifestación para retornar al RPM, que cuando se celebró la vinculación la única carga de la entidad era dejar constancia de la libre escogencia a través del formulario de vinculación sin necesidad de registrar otras pruebas del acto jurídico. Apoyó su posición en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la inexistencia del acto jurídico de traslado pensional e indicó no puede ordenarse la devolución de los rendimientos y primas de seguro, ni tampoco la indexación y en caso de ordenar el traslado de la totalidad de los recursos se autoricen las restituciones mutuas en favor de la entidad. Solicita se revoque la sentencia y se absuelva a la entidad de las condenas.

La **parte demandante**, presentó alegatos indicando que en ningún momento Porvenir le suministro información adicional sobre las características de la pensión en el RAIS, y los requisitos de ambos regímenes a fin de contar con información suficiente, integral y completa sobre las consecuencias de trasladarse del RPM, el fondo no demostró que hubiese obrado con diligencia y en cumplimiento de sus deberes exigidos por la normatividad y la jurisprudencia. Solicita se confirme la sentencia de primera instancia en lo relacionado a la ineficacia del traslado y sus consecuencias.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó sus alegatos por fuera del término legal, el cual venció el día 17 de mayo de 2023.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO.

Conoce la Sala de los recursos de apelación propuesto por Porvenir SA y de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Adicionalmente, la Sala nota que vienen reunidos los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia del juez, capacidad para ser parte y capacidad procesal y que no se observan causales de anulación ni de violación de derechos fundamentales de las partes.

2.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala se ocupará de analizar, si estuvo o no ajustada a derecho la declaratoria de ineficacia del traslado del señor Jorge Enrique Toro Restrepo al RAIS, con el consecuente regreso al RPM administrado por Colpensiones, y, las consecuencias impuestas en primera instancia.

2.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

Según el acervo probatorio arrimado, el demandante nació el 24 de julio de 1954 como se observa en la historia laboral (folio 289 y 336 archivo 01 anexos demanda); que estuvo vinculado al Municipio de Medellín desde 27 de diciembre de 1982 hasta el 14 de julio de 1986, luego se afilió a Cajanal desde el 25 de febrero de 1988 hasta el 31 de enero de 1989 según se infiere del resumen de la historia laboral emitida por Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficina de Bonos Pensionales del (folios 336 a 341 archivo ibidem); y se trasladó al RAIS a través del fondo privado de pensiones Porvenir S.A. suscribiendo formulario de afiliación el 16 de septiembre de 1994, con efectividad a partir de octubre de 1994, con movilidad en el mismo régimen, el 12 de abril de 2000 a Horizonte, luego a Porvenir el 17 de junio de 2005, se trasladó a Horizonte el 13 de noviembre de 2007, y finalmente retornó a Porvenir el 01 de enero de 2014, como registra el certificado de Asofondos (fl. 225 archivo ibidem).

2.4. INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto, es recordar que, de acuerdo con el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando cualquier persona natural o jurídica, desconozca ese derecho, se hará acreedor a las sanciones del inciso 1º del artículo 271 de la misma ley. Esta última norma establece que cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Aunque la afiliación es libre y voluntaria, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de modo que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Acerca del deber de información la CSJ desde la sentencia SL-31989 de 2008, sentó una jurisprudencia muy sólida que se mantiene inclusive hasta esta parte, que es importante memorar:

(...) Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica. Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; (...) su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado,

Por lo tanto, no le asiste razón a la recurrente por cuanto es insuficiente afirmar que la afiliada expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, porque no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado cuando se carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a las circunstancias particulares del afiliado, tal como lo establecen los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993 la entidad administradora siempre ha estado obligada a brindarla.

El fondo de pensiones es responsable de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, los elementos determinantes para tomar una decisión informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Siguiendo las reglas de la carga de la prueba, como el afiliado alegó la ausencia de información o la deficiente entrega por parte de la AFP, es la administradora quien tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, afirmación que encuentra respaldo en el artículo 1604 del Código Civil, que señala: «*la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo*».

El actor, al afirmar que «*no recibió la información*», por tratarse de una negación indefinida, quedó relevado de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba al demandado, quien deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Conviene no olvidar el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, vertido en la SL19447-2017, en ella profundizó sobre la constatación del deber de información, afirmó que era ineludible, por lo que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación era insuficiente. Es por ello que «*el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea*» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021), la cual no se infiere de la simple firma del formulario de afiliación.

Se insiste, que las AFP cumplan el deber de información y su acreditación en el proceso no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, son insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era Porvenir S.A. quien debía probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa a la demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares de su caso, debiéndole informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual.

En esa línea no demostró explicarle que en este régimen, si no completa el capital suficiente para obtener al menos una pensión mínima —equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de

Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, no analizó si la parte actora es beneficiaria del régimen de transición pensional y las ventajas derivadas del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios para tomar la decisión de traslado.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien Porvenir S.A. afirmó al contestar la demanda que al actor se le brindó la asesoría requerida para el caso (fl. 192 a 219 ibidem), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenía la carga de acreditarlo, sin embargo, solo aportó el formulario de afiliación inicial y los subsiguientes a través de los cuales el afiliado se movilizó en el RAIS, que no da cuenta de la información realmente suministrada al demandante en ese momento, adicional que, como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que el demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

2.6. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

Considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado de la demandante del al RAIS, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; no sin antes advertir que el hoy accionante estaba afiliado a Cajanal al momento en que operó el traslado

al RAIS, pero como a través del Decreto 2196 de 2009 se ordenó la supresión y liquidación de dicho ente, ordenándose en el numeral 4, que debía iniciar los trámites necesarios y pertinentes para el traslado de sus afiliados cotizantes a la administradora del RPMPD del ISS hoy Colpensiones, en razón de ello, la orden de afiliación debe impartirse a Colpensiones por ser hoy el único ente administrador del RPMPD.

Por lo que es legítimo que **Porvenir S.A.** traslade a **Colpensiones** no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, **no pudiendo la AFP conservar ningún valor descontado de la cotización**, como lo ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P. Gerardo Botero Zuluaga; debiéndose adicionar en este punto el fallo de primer grado, ordenando trasladar también los porcentajes destinados a los seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados.

Frente a lo correspondiente a la indexación, esta Corporación se ciñe a los parámetros establecidos recientemente por nuestro órgano de cierre, en sentencias SL 359-2021 y especialmente la SL 950 de 2022, en la que se señala:

... Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Criterio que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

Tampoco comparte la Sala los argumentos expuestos por la apoderada judicial de Porvenir S.A. relativo a la no devolución de las cuotas de administración y seguros

previsionales, por cuanto si bien del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 se desprende que están previstos para ambos regímenes, y en los artículos 60 y 104 de la referida ley se establece su pago a cargo de los afiliados, lo cierto es que ante la declaratoria de la ineficacia del traslado de régimen pensional, al volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la misma, estos no se pueden generar en favor de la administradora del fondo privado de pensiones demandada.

Según el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, la Sala adicionará la decisión para precisar que todas las obligaciones de traslado impuestas a Porvenir S.A. se deberán realizar en los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia –art. 16 Decreto 692 de 1994–.

Así mismo, se complementará la sentencia de primer grado disponiendo que el traslado de los recursos deberá hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada período cotizado, especificando cada valor, “...*junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...*”.

2.7. PRESCRIPCIÓN

La excepción de prescripción no está llamada a prosperar por cuanto la acción que involucra el tema de traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con la causación, requisitos y valor de la pensión, por lo cual se debe predicar la imprescriptibilidad de la presente acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en apelación y consulta se adicionará y confirmará.

2.8. COSTAS

Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir S.A. y en favor de la demandante, por resultar vencida en el recurso, las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000 a cargo de Porvenir.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. DECIDE:

PRIMERO: Adicionar el numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el 29 de noviembre de 2022, en cuanto a ordenar que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, **Porvenir S.A.** deberá trasladar a **Colpensiones, debidamente indexados**, además de los conceptos dispuestos en la primera instancia, los porcentajes para los seguros previsionales y el fondo de garantía pensión mínima, descontados al demandante mientras estuvo afiliado a dicha Administradora, junto con la historia laboral de la afiliada con la información discriminada y detallada por cada período cotizado, especificando cada valor, de los ciclos, IBC, aportes, según las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

TERCERO: Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir S.A. en favor del demandante, por resultar vencida en el recurso, las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ